

 <p>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</p> <p>JUZGADO OCTAVO PENAL DEL CIRCUITO DE PALMIRA-VALLE</p>	<p>SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA No. 25</p>	 <p>ERES EXCELENCIA RESPONSABILIDAD ÉTICA SUPERACIÓN</p>
---	---	--

Palmira - Valle del Cauca, veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024).

I OBJETO DE LA DECISIÓN

Resolver en primera instancia, la acción de tutela presentada por la señora AURA NELLY RIVERA DE OSPINA, en calidad de agente oficioso de su esposo el señor WILLIAM OSPINA CELIS contra la NUEVA EPS, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la salud y vida.

II IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONNATE

Se trata de WILLIAM OSPINA CELIS identificado con la cédula de ciudadanía N° 16.241.458, quien actúa por medio de su esposa AURA NELLY RIVERA DE OSPINA identificada con la cédula de ciudadanía N° 31.147.877, con correos electrónicos para notificaciones: nellyriverarivera122@gmail.com - ospinaceliswilliam@gmail.com y abonados celulares: 3167732000 y 3022170239.

III IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIONADA Y VINCULADAS

EMPRESA PROMOTORA DE SALUD – NUEVA EPS S.A, identificada con Nit. 900.156.264-2, con domicilio principal en la carrera 85K # 46A – 66, piso 2 y 3 en Bogotá D.C., representada legalmente por el agente interventor Dr. Julio Alberto Rincón Ramírez, con correo electrónico para notificaciones judiciales: secretaria.general@nuevaeps.com.co.

EPS CAPITAL SALUD, identificada con Nit. 900.298.372-9, con domicilio principal en la calle 77A # 12A -35 en Bogotá D.C., representada por el apoderado general, Dr. Marlon Yesid Rodríguez Quintero, con correo electrónico para notificaciones: notificaciones@capitalsalud.gov.co – notificación.tutelas@capitalsalud.gov.co.

CLINICA PALMIRA (V), identificada con Nit. 891.300.047-6, representada por su gerente, Dr. Fernando Bedoya Herrera, ubicada en la carrera 31 # 30-62 barrio Central de Palmira (V), con correo electrónico para notificaciones judiciales: atencionalusuario@clinicapalmira.com – gerencia@clinicapalmira.com y teléfono: 602 (2) 285 60 70.

IPS -CLINICA DIME, identificada con Nit. 800.024.390-3, representada legalmente por el Dr. Alejandro Varela Villegas, con domicilio principal en la avenida 5 norte # 20N – 75 en Cali (V), con correo electrónico para notificaciones judiciales: servicioalcliente@dime.com.co – analistajuridico@dime.com.

IV HECHOS

1. Manifiesta la accionante que el señor WILLIAM OSPINA CELIS es un paciente de 75 años, que se encuentra afiliado al régimen contributivo en salud, según sus dichos, con la EPS CAPITAL SALUD
2. Indica que su esposo, padece de Bradicardia Sintomática y de Síndrome de Nodo Sinusal Enfermo – Bigeminismo, éste último, como diagnostico relacionado, presentando además patologías de base como Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial e Hipotiroidismo.
3. Refiere, que el señor OSPINA CELIS estuvo hospitalizado en la CLINICA PALMIRA alrededor de 21 días de cara a un infarto que sufrió en el mes de abril hogaño, ordenándose en su favor por el galeno especialista en cardiología: **i)** Consulta de primera vez por especialista en medicina interna y **ii)** Consulta de primera vez por especialista en cardiología (electrofisiología); esta última, con el fin de determinarse por el médico, si el agenciado es candidato a un implante de marcapasos.
4. No obstante, asegura que intentó agendar cita con la especialidad de electrofisiología en la IPS DIME, donde le manifestaron que no había disponibilidad para el efecto, encontrándose a la fecha en la espera de la autorización de las aludidas consultas médicas, las cuales, requiere WILLIAM OSPINA CELIS con carácter urgente debido a que su ritmo cardiaco es muy lento, entre otros quebrantos de salud. En ese sentido, solicita vía acción de tutela, se le ordene a la

EPS accionada programar las citas médicas prescritas en favor del agenciado, así como un tratamiento integral para éste último. Además, solicitó se decretara como medida provisional previa resolución del trámite tutelar, la autorización de las consultas mencionadas.

5. A folio 7 a 8 del archivo digital 02EscritoTutela1AconAnexos obra copia de la historia clínica expedida por la CLÍNICA PALMIRA a nombre de OSPINA CELIS WILLIAM, de donde se puede evidenciar que aquel presenta como **diagnósticos:** -Bradicardia Sintomática, -Síndrome de Nodo Sinusal Enfermo -Bigeminismo; y como **antecedentes:** -Enfermedad Coronaria Multivaso con RVM 2019, -Diabetes Mellitus, -Hipertensión Arterial, e -Hipotiroidismo. Además, en el ítem de análisis de dicho documento se plasmó lo siguiente: *"(...) **PACIENTE DE 75 AÑOS CON ANTECEDENTES ANOTADOS, CURSO ESTANCIA UCI POR BRADICARDIA SINUSAL SINTOMATICA Y BIGEMINISMO, SOSPECHA DE ENFERMEDAD DE NODO SINUSAL, AL MOMENTO CON EVOLUCIÓN ESTABLE , MODULANDO SIRS, TOLERANDO VIA ORAL, SE TOMO HOLTER CON RITMO DE BASE SINUSAL QUE ALTERNA CON RITMO AURICULAR, EXTRASISTOLES VENTRICULARES CON CARGA ARRITMICA 38,2 %** **POR LO QUE SE INICIO REMISION PARA VALORACION Y MANEJO POR ELECTROFISIOLOGIA Y POSIBLE REQUERIMIENTOT [sic] DE MARCAPASOS A LA ESPERA DE RESPUESTA POR PARTE DE EPS SIN EMBARGO SIN RESPUESTA HASTA EL MOMENTO (...)**"*
6. A folio 9 del archivo digital 02EscritoTutela1AconAnexos obra copia de la solicitud de servicios del 30/04/2024 prescritos por el médico especialista en Cardiología, Dr. Miguel Eduardo Andrade Granja, con registro medico No. 16.072 en favor del agenciado, tales como: **i) Consulta de primera vez por especialista en medicina interna.** **ii) Consulta de primera vez por especialista en cardiología.**
7. A folio 10 del archivo digital 02EscritoTutela1AconAnexos obra copia de la remisión para consulta especializada por electrofisiología en la IPS DIME - Clínica Neurocardiovascular S.A ubicada en la avenida 5 norte # 20N-75 en Cali (V).
8. A folio 11 ibidem obra copia del chat de WhatsApp en donde la IPS DIME le indica a la señora Nelly Rivera a través de dicho medio que no cuenta con disponibilidad para agendar consulta de electrofisiología.

V TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

A través de auto de sustanciación No. 164 del 7 de mayo de 2024, éste Despacho en ejercicio de funciones Constitucionales admitió la demanda Constitucional y, en consecuencia, dispuso notificar del trámite junto con todos sus anexos a la NUEVA EPS, concediéndole a dicha entidad el termino de (2) días para que, si a bien lo tenía, ejerciera su derecho de defensa y contradicción, vinculándose además al asunto, a la EPS CAPITAL SALUD, a la CLINICA PALMIRA (V), y a IPS -CLINICA DIME con el propósito que, en tiempo igual al señalado, dieran contestación a la acción tuitiva.

De otro lado, se ordenó en la misma providencia **decretar** en favor del señor WILLIAM OSPINA CELIS **medida provisional inmediata** consistente en las siguientes valoraciones, a saber: **(i)** Consulta de primera vez por especialista en medicina interna y **(ii)** Consulta por primera vez por especialista en cardiología (electrofisiología), con el fin de evitar la configuración de un perjuicio irremediable en razón a la gravedad de las enfermedades que afronta el agenciado; decisión que, pese a que fue debidamente comunicada a la NUEVA EPS (Cfr. Archivo digital 04ConstNotifAutoAdmiteTutela1A&DecretaMedida), dicha entidad hizo caso omiso a lo de su competencia.

VI RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADAS

EPS CAPITAL SALUD -por medio de su apoderado judicial, Dr. Joaquín Enrique Brito Gámez- sostuvo que, el señor OSPINA CELIS no se encuentra activo en salud con la entidad que representa, sino con la NUEVA EPS según consulta a la pagina del ADRES, siendo la aludida EPS la llamada a responder por cada uno los hechos y pretensiones aducidos y reclamados en la demanda de amparo. Por lo que solicita la desvinculación del trámite de la entidad que agencia al no tener legitimidad en la causa por pasiva.

IPS - DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR -a través de su representante legal, Dr. Alejandro Varela Villegas- esgrimió que en favor del agenciado se han programado seis (6) consultas de primera vez por especialista en cardiología (electrofisiología), a las que el señor OSPINA CELIS no ha asistido, creando para la

entidad una congestión en la agenda, quitándole así la oportunidad a otros pacientes de acceder a las citas con especialista. Sin embargo, aludió que, beneficio del mencionado, se había programado nuevamente consulta por cardiología para el 16 de mayo de 2024 a las 10:00 a.m., solicitando que, en caso de que el paciente no asistiera, la EPS cambie de IPS para la prestación de las tecnologías en salud requeridas. De ese modo, solicitó se desvincule a la entidad que representa de la acción de amparo, debido a que la misma no ha vulnerado y/o amenazado los derechos fundamentales del agenciado.

CLINICA PALMIRA (V) -por intermedio de la funcionaria de servicio de atención al usuario, señora Jackeline Rojas Marín- indicó que WILLIAM OSPINA CELIS identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.241.458 estaba afiliado, según eso, a la IPS Medicips. Así las cosas, afirmó que el agenciado no contaba con autorización para las citas de medicina interna ni de cardiología, no pudiéndose programar ninguna para lo oportuno. Que, al llamar al paciente para darle dicha información -a/ abonado celular: 3155514245-, éste nunca contestó.

La EMPRESA PROMOTORA DE SALUD – NUEVA EPS S.A -actuando por medio de su apoderada especial, Dra. Astrid Johana Reyes Garzón- expresó que la entidad que representa asumía todos los servicios requeridos por el señor OSPINA CELIS, siempre y cuando, la prestación de los mismos se encontrara dentro de la orbita prestacional del sistema general de seguridad social en salud prevista en la Ley. Seguidamente, precisó que las instituciones prestadoras de servicios de salud eran las encargadas de materializar las consultas a los afiliados, asignando citas para el efecto conforme a la disponibilidad de la agenda. Por lo tanto, aseguró que en el presente asunto no se le estaba negando al agenciado la prestación de los servicios de salud prescritos en su favor. Además, refirió que, en contra de la EPS accionada no se podía ordenar la prestación de un tratamiento integral al paciente, puesto que ello era amparar amenazas futuras e inciertas que no habían ocurrido, lo cual vulneraba el derecho al debido proceso de la demandada. Subsidiariamente, pidió el **reembolso** de los gastos en que incurra la NUEVA EPS para el cumplimiento del fallo tutelar.

VII CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Despacho es competente para decidir en primera instancia la presente acción de tutela de conformidad a lo consagrado en los artículos 86° de la Constitución Política de Colombia, 37° del Decreto 2591 de 1991, 1° numeral 2° del Decreto 1983 de 2017, y 2.2.3.1.2.1. numeral 2° del Decreto 333 de 2021.

2. Problema a resolver

En atención a lo expuesto por la agente oficiosa corresponde a la Judicatura dilucidar si la entidad accionada y vinculadas le están vulnerando derechos fundamentales al señor WILLIAM OSPINA CELIS.

3.Aspectos Generales de la Acción de tutela.

Fundamento de la acción de tutela lo constituye el art. 86 de la Constitución Política de nuestro país, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991 y 306 de 1992. estableciendo que se trata de un mecanismo concebido para la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por cualquier acción u omisión de las autoridades públicas, siempre que no exista otro recurso o medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Cuatro elementos básicos deben considerarse para efectos de analizar el caso que ocupa nuestra atención en esta sentencia: la persona contra quien va dirigida la acción (servidor público o particular), la conducta o acto que da lugar al hecho que origina la inconformidad (acción u omisión), los derechos presuntamente violados (fundamentales o de otra naturaleza), y las razones que bien pueden presentarse para actuar o no actuar por parte de la persona contra la cual va dirigida la acción constitucional.

Veamos entonces cada uno de esos cuatro elementos en el caso que nos ocupa:

En el caso EMPRESA PROMOTORA DE SALUD – NUEVA EPS S.A, contra la cual está dirigida la presente acción de tutela, es de carácter particular indiscutiblemente, lo que nos obliga a remitirnos al art. 42 del Decreto 2591 de 1991, que regula los casos en los cuales procede esta acción constitucional contra particulares, bien por acción bien por omisión, que en su numeral 2º consagra:

"Cuando contra quien se hubiese hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio de salud."

El citado numeral abre las puertas para entrar a analizar los hechos expuestos por la tutelante, toda vez que la entidad accionada está encargada de la prestación del servicio público de salud.

En cuanto al segundo elemento básico, pasemos al análisis de los hechos con base en los cuales solicita la accionante se le proteja el derecho a la salud y a la vida de del señor WILLIAM OSPINA CELIS, por cuanto las entidades contra la cual dirige la acción constitucional, no le agenda de manera oportuna la valoración con médicos especialista en medicina interna y cardiología.

De otra parte, con relación a la patología de la ofendida tal como aparece en la historia de Clínica Palmira, fue diagnosticado con Bradicardia Sintomática, -Síndrome de Nodo Sinusal Enfermo –Bigeminismo; y con antecedentes: -Enfermedad Coronaria Multivaso con RVM 2019, -Diabetes Mellitus, -Hipertensión Arterial, e - Hipotiroidismo. A

Patologías que se hacen más gravosa por cuanto la señora OSPINA, es un adulto mayor de 75 años.

Ahora estando de por medio la salud en conexidad con la vida del paciente, se plantea la discusión si ha de aplicarse las normas legales a las que estrictamente se acogen, o si los derechos invocados a en favor del afectado, pueden estar por encima de esa legislación. En otras palabras, el POS o los derechos fundamentales constitucionales, donde está inmerso el derecho a la vida, que no solo debe considerarse como la existencia de la persona como tal, sino también todas las circunstancias que la incomodan hasta el punto de hacerla insoportable.

Conforme al relato de la accionante, y los documentos allegados al trámite de tutela, está suficientemente acreditado que al agenciado le fueron ordenados el 30 de abril de 2024, por el especialista tratante en Cardiología, Dr. Miguel Eduardo Andrade Granja, con registro medico No. 16.072, los siguientes servicios en salud con el fin de determinar si aquel requiere de un marca pasos para el restablecimiento de su salud, a saber: **i) Consulta de primera vez por especialista en medicina interna y ii) Consulta de primera vez por especialista en cardiología, cómo consecuencia de sus patologías de -Bradicardia Sintomática, -Síndrome de Nodo Sinusal Enfermo – Bigeminismo, Enfermedad Coronaria Multivazo con RVM 2019, -Diabetes Mellitus, - Hipertensión Arterial, e -Hipotiroidismo.**

Sin embargo, afirma la accionante que a la fecha de interposición de la acción tuitiva -06/05/2024- la NUEVA EPS no ha autorizado al señor OSPINA CELIS de manera propia y/o por intermedio de las IPS´s de su red de apoyo dichas citas médicas, pese a su complejo estado de salud, aportando la imagen de la comunicación por el aplicativo whastsapp donde se le indica que la clínica DIME, no tiene disponibilidad

En oposición a lo anterior, la CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR - DIME IPS indicó que, en favor del agenciado, se habían programado seis (6) consultas de primera vez por especialista en cardiología (electrofisiología), a las que, el mencionado, no había asistido, programándose así una nueva cita para el 16 de mayo de 2024 a las 10:00 a.m., sin que al plenario, dicha entidad -IPS DIME -, haya aportado constancia de programación de citas y/o prueba sumaría al respecto.

No es aceptable que la entidad accionada olvidándose de la fundamentalísima prioridad que es la prestación del servicio público a la salud, a la dignidad humana; faltándoles sentido social, y con los adultos mayores; argumente en su respuesta que se programaría de acuerdo a la disponibilidad, transcurrido más de quince días de expedida la orden médica, mas, cuando la historia clínica anexa a la orden de valoración por medicina interna y cardiología, se consigna que el paciente permaneció hospitalizado en UCI por BIOCARDIA SINSUSAL, y el médico especialista consigna en la historia clínica que la consulta de valoración deber ser prioritaria.

por cuanto, no se necesitan mayores discernimientos para concluir la urgencia y necesidad en la prestación de los servicios de salud ordenados por el galeno tratante en beneficio de WILLIAM OSPINA CELIS, se le ordenará a la EPS accionada qué

propiamente y/o a través de una IPS adscrita a su red prestadora de servicios en salud, autorice y materialice las consultas **de medicina interna y cardiología** requeridas por el agenciado para la paliación de sus patologías, sin barreras y dilaciones injustificadas.

Es por ello que la línea jurisprudencial de la Corte, ha precisado que la salud puede ser considerada como un derecho fundamental no solo cuando peligra la vida como mera existencia, sino que ha resaltado que la salud es esencial para el mantenimiento de la vida en condiciones dignas y que el acceso a tratamientos contra el dolor o el suministro de todo lo necesario, para aquellas personas que padecen de enfermedades catastróficas que si bien, algunas son incurables, debe propenderse por todo lo necesario para un padecimiento en condiciones dignas.¹

De otro lado, se concederá por el Despacho un **tratamiento integral** qué en salud requiera el señor OSPINA CELIS, toda vez que la NUEVA EPS, estando enterada de las aludidas prescripciones médicas en favor del agenciado *-desde el 30/04/2024-*, aunado a la determinación provisional que en su protección se adoptó por esta Judicatura, desatendió **negligentemente** y **sin razón justificable** la prerrogativa que le fue asignada por ministerio de la Ley en cuanto al aseguramiento en salud de sus afiliados, máxime cuando existe un concepto de un médico especialista que busca el restablecimiento de la sanidad del señor WILLIAM OSPINA CELIS. Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia T-017/21 del 25 de enero de 2021 con ponencia de la Mg. Cristina Pardo Schlesinger precisó lo siguiente:

*"(...) En reiteradas ocasiones, esta Corporación ha señalado que los usuarios del sistema de salud tienen el derecho constitucional a que se les garantice el acceso efectivo a **los servicios médicos necesarios e indispensables para tratar sus enfermedades, recuperar su salud y resguardar su dignidad humana**. Sobre este punto, la Corte ha resaltado que en el sistema de salud, quien tiene la competencia para determinar cuándo una persona requiere un procedimiento, tratamiento, o medicamento para promover, proteger o recuperar su salud **es, prima facie, el médico tratante**. Por lo tanto, es el profesional de la salud el que está capacitado para decidir, con base en criterios científicos y por ser quien conoce de primera mano y de manera detallada la condición de salud del paciente, si es necesaria o no la prestación de un servicio determinado.*

¹ Sobre el tema particular, consultar las Sentencias: T-1384 de 2000, T-365A-06, entre muchas otras.

De lo anterior, la Sala precisa que la importancia que le ha otorgado la jurisprudencia al **concepto del médico tratante** se debe a que éste **(i) es un profesional científicamente calificado; (ii) es quien conoce de manera íntegra el caso de su paciente y las particularidades que pueden existir respecto de su condición de salud y (iii) es quién actúa en nombre de la entidad que presta el servicio.** En consecuencia, **el médico tratante** es la persona que cuenta con la información adecuada, precisa y suficiente **para determinar la necesidad y la urgencia de un servicio a partir de la valoración de los posibles riesgos y beneficios que este pueda generar, y es quien se encuentra facultado para variar o cambiar la prescripción médica en un momento determinado, de acuerdo con la evolución en la salud del paciente.**

6.2. Al respecto, esta Corporación ha señalado que **el criterio del médico tratante, como profesional idóneo, es esencial para establecer cuáles son los servicios de salud a que tienen derecho los usuarios.** En este orden de ideas, en la sentencia T-345 de 2013, ampliamente reiterada con posterioridad, la Corte señaló que:

"Siendo el médico tratante la persona facultada para prescribir y diagnosticar en uno u otro sentido, **la actuación del Juez Constitucional debe ir encaminada a impedir la violación de los derechos fundamentales del paciente y a garantizar el cumplimiento efectivo de las garantías constitucionales mínimas, luego el juez no puede valorar un procedimiento médico (...).**

Por lo tanto, la condición esencial para que el Juez Constitucional **ordene que se suministre un determinado procedimiento médico o en general se reconozcan prestaciones en materia de salud, es que éste haya sido ordenado por el médico tratante,** pues lo que se busca es resguardar el principio según el cual, el criterio médico no puede ser reemplazado por el jurídico, y solo los profesionales de la medicina pueden decidir sobre la necesidad y la pertinencia de un tratamiento médico."

6.3. En conclusión, **el criterio del médico tratante, como idóneo y oportuno, es el principal elemento para la orden o suspensión de servicios de salud. De manera no son las EPS e IPS, así como tampoco el juez constitucional, quienes están autorizados para desatender la prescripción médica sin justificación suficiente, sólida y verificable, que pueda contradecir la apreciación del profesional de salud,**

conocedor de las condiciones particulares del paciente. (Negritillas y Subrayado por el Despacho).

Además, cómo sustento de la determinación de tratamiento integral, se tendrá en cuenta la avanzada edad del señor WILLIAM OSPINA CELIS, quién es una persona de la tercera edad (**75 años**) que merece un especial amparo Constitucional del Estado en su derecho fundamental a la salud y vida (según certificación de esperanza de vida por el DANE²), más aún, cuando éste sobrelleva enfermedades que hacen más complicada su existencia (Bradicardia Sintomática, -Síndrome de Nodo Sinusal Enfermo –Bigeminismo, Enfermedad Coronaria Multivaso con RVM 2019, -Diabetes Mellitus, -Hipertensión Arterial, e -Hipotiroidismo).

Por ello, dicha **garantía integral** se circunscribirá a todos los tratamientos, medicamentos, intervenciones, procedimientos, exámenes, controles, seguimientos y demás servicios de salud sean ordenados por el médico tratante, con ocasión al cuidado y paliación de las referidas enfermedades, con el fin de evitar que, a futuro, se tengan que presentar nuevas acciones de tutela por cada servicio de salud que requiera el señor OSPINA CELIS para el tratamiento de las enfermedades que sobrelleva. Al respecto, el alto Tribunal Constitucional expuso en sentencia T-010/19 del 22 de enero de 2019 lo siguiente:

*" (...) En ese contexto, sostuvo este Tribunal en reciente sentencia T-171 de 2018³ que el **principio de integralidad** que prevé la ley 1751 de 2015 opera en el sistema de salud **no solo para garantizar la prestación de los servicios y tecnologías necesarios para que la persona pueda superar las afectaciones que perturban sus condiciones físicas y mentales, sino, también, para que pueda sobrellevar la enfermedad manteniendo su integridad y dignidad personal.** En ese sentido, destacó la Corte que el servicio "se debe encaminar a la protección constitucional del derecho fundamental a la salud, es decir que, a pesar del padecimiento y además de brindar el tratamiento integral adecuado, se debe propender a que el entorno [del paciente] sea tolerable y digno".*

² [https://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=853&Itemid=28&phpMyAdmin=3om27vamm65hhkhrtgc8rrn2g4#:~:text=La%20esperanza%20de%20vida%20\(que,a%C3%B1os%20m%C3%A1s%20que%20los%20hombres.](https://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=853&Itemid=28&phpMyAdmin=3om27vamm65hhkhrtgc8rrn2g4#:~:text=La%20esperanza%20de%20vida%20(que,a%C3%B1os%20m%C3%A1s%20que%20los%20hombres.)

³ M.P Cristina Pardo Schlesinger.

6.3 En suma, ha considerado la propia jurisprudencia que el **principio de integralidad**, a la luz de la Ley Estatutaria de Salud, **envuelve la obligación del Estado y de las entidades encargadas de la prestación del servicio de garantizar la autorización completa de los tratamientos, medicamentos, intervenciones, procedimientos, exámenes, controles, seguimientos y demás servicios que el paciente requiera para el cuidado de su patología, así como para sobrellevar su enfermedad.**" (Negrillas y Subrayado por el Despacho).

En igual sentido, dicha colegiatura indicó en sentencia T-062/17 del 3 de febrero de 2017 con ponencia del Mg. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo qué:

"(...) Esta Corporación, en diversas oportunidades, se ha referido al **principio de integralidad en materia de salud**. Una de las perspectivas a través de las cuales se ha abordado el tema, es aquella relativa a la adopción de todas las medidas necesarias encaminadas a brindar un tratamiento que efectivamente mejore las condiciones de salud y calidad de vida de las personas⁴. Es decir, es obligación del Estado y de las entidades encargadas de la prestación del servicio, propender hacia **"la autorización total de los tratamientos, medicamentos, intervenciones, procedimientos, exámenes, controles, seguimientos y demás que el paciente requiera con ocasión del cuidado de su patología y que sean considerados como necesarios por el médico tratante"**⁵, como lo determinó también el artículo 8 de la Ley 1751 de 2015.

En ese orden, no se puede imponer obstáculo alguno para que el paciente acceda a todas aquellas prestaciones que el médico tratante considere que son las indicadas para combatir sus afecciones, de manera oportuna y completa.

Así, por regla general, los servicios que deben ser otorgados de manera integral, son aquellos que el profesional de la salud estime pertinentes para atender el padecimiento que se presente. Al respecto, la Corte ha señalado que:

"(...) el **principio de integralidad** no puede entenderse de manera abstracta, lo cual supone **que las órdenes de tutela que reconocen**

⁴ Sentencia T-408 de 2011.

⁵ Sentencia T-408 de 2011.

atención integral en salud se encuentran sujetas a los conceptos que emita el personal médico, y no, por ejemplo, a lo que estime el paciente. En tal sentido, se trata de garantizar el derecho constitucional a la salud de las personas, siempre teniendo en cuenta **las indicaciones y requerimientos del médico tratante**.⁶

Bajo esa perspectiva, dado que con el tratamiento integral se logra garantizar la atención eficiente, adecuada y oportuna de las patologías que puedan presentar los pacientes diagnosticados por el respectivo médico tratante, **el amparo por vía de tutela se torna procedente**.”(Negrillas y Subrayado por el Despacho).

Respecto a la concesión de tratamiento integral vía acción tuitiva, el alto Tribunal Constitucional decantó en sentencia T-259 del 6 de junio de 2019 que, para acceder a éste, es necesario que se den cualquiera de los siguientes presupuestos, que:

"(...) **(i)** la entidad encargada de la prestación del servicio ha sido **negligente** en el ejercicio de sus funciones y ello ponga en riesgo los derechos fundamentales del paciente. Igualmente, se reconoce cuando **(ii)** el usuario es un **sujeto de especial protección constitucional** (como sucede con los menores de edad, **adultos mayores**, indígenas, desplazados, personas con discapacidad física o que padezcan **enfermedades catastróficas**); o con aquellas **(iii)** personas que **"exhiben condiciones de salud extremadamente precarias e indignas"**. (Negrillas por el despacho).

Ahora bien, reclama la EMPRESA PROMOTORA DE SALUD – NUEVA EPS S.A que en su favor se ordene por la Judicatura en éste trámite el recobro ante la ADRES de los gastos en que incurra para el cumplimiento de la orden tutelar. Sin embargo, ello no está llamado a prosperar por esta vía (sino por la jurisdicción administrativa), puesto que las EPS´s asumen la garantía del Plan Básico de Salud de sus afiliados por medio de los recursos de la UPC y/o el presupuesto máximo girado a sus cuentas mensualmente por la ADRES, siendo únicamente los servicios y tecnologías excluidos de financiación con recursos públicos de la salud los que sufraga el ADRES.

⁶ Sentencia T-053 de 2009.

Sobre el particular, la Corte Constitucional en auto 389/21 del 22 de julio de 2021 indicó que "(...) **la competencia judicial para conocer asuntos relacionados con el pago de recobros judiciales al Estado por prestaciones no incluidas en el POS, hoy PBS, y por las devoluciones o glosas a las facturas entre entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.** (Negrillas y Subrayado por el Despacho).

Para finalizar, se debe anotar, que en el curso del presente asunto Constitucional se cometió una conducta punible por parte de los representantes legales de la NUEVA EPS y CLINICA PALMIRA, toda vez que, habiéndose ordenado por esta Judicatura en favor del agenciado la programación inmediata de -Consulta de primera vez por especialista en medicina interna y -Consulta por primera vez por especialista en cardiología (electrofisiología), los responsables del cumplimiento de dicha determinación judicial se abstuvieron de darle materialidad a está sin razón alguna. Es más, en respuesta al traslado del auto admisorio de la acción de tutela, No. 164 del 07 de mayo del año en curso y la orden de medida provisional, contestan para el ---ratificando el incumplimiento de la orden judicial.

El artículo 454 del Código Penal consagra en su tenor literal el delito de fraude a resolución judicial o administrativa de policía en los siguientes términos: "El que por cualquier medio **se sustraiga al cumplimiento de obligación impuesta en resolución judicial o administrativa de policía, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de cinco (5) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.**"

Dicho lo anterior, se compulsarán copias con destino a la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen los delitos en los que hayan podido incurrir en éste trámite el agente interventor de la nueva EPS, Dr. Julio Alberto Rincón Ramírez, en calidad de representante legal de la referida entidad conforme al certificado de existencia y representación lega, el Dr. Fernando Bedoya Herrera, y la Dra. Adriana Tobar Calderón en calidad, ambos, de gerentes de la CLINICA PALMIRA.

En suma, se prevendrá a la EMPRESA PROMOTORA DE SALUD – NUEVA EPS S.A según lo establecido en el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991 para qué, en ningún otro caso, vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron lugar a la

presentación del amparo Constitucional *-no autorización y materialización de servicios de salud prescritos por el galeno tratante-*, conminándola, a no imponer cargas y/o obstáculos administrativos injustificados a sus afiliados frente a lo de su competencia (aseguradora en salud), con la advertencia que, sí procediere de modo contrario, será sancionada conforme a las previsiones normativas del Decreto citado, sin perjuicio de las responsabilidades en que ya hubieren incurrido.

En mérito de lo expuesto el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Palmira - Valle en ejercicio de funciones Constitucionales, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

VIII RESUELVE

PRIMERO: PROTEGER los derechos fundamentales a la salud y vida del señor WILLIAM OSPINA CELIS identificado con la cédula de ciudadanía N° 16.241.458, quién actúa a través de agente oficiosa.

SEGUNDO: ORDENAR a la Doctora SILVIA PATRICIA LONDOÑO GAVIRIA en calidad de gerente regional Suroccidente de la NUEVA EPS y/o quien haga sus veces qué dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente proveído, si aún no lo ha hecho, proceda a autorizar y materializar en favor del señor OSPINA CELIS WILLIAM (sin imposición de barreras administrativas), los servicios de salud que le fueron ordenados por su galeno tratante el pasado 30 de abril de 2024, a saber: **i) Consulta de primera vez por especialista en medicina interna y ii) Consulta de primera vez por especialista en cardiología.**

TERCERO: ORDENAR a los representantes legales de la EMPRESA PROMOTORA DE SALUD – NUEVA EPS S.A, responsables del cumplimiento de acciones de tutela de la referida entidad y/o a quien corresponda, brindar **TRATAMIENTO INTEGRAL** que en materia de salud requiere y llegue a requerir el señor WILLIAM OSPINA CELIS, en razón de sus patologías de **Bradicardia Sintomática, -Síndrome de Nodo Sinusal Enfermo –Bigeminismo, Enfermedad Coronaria Multivazo con RVM 2019, -Diabetes Mellitus, -Hipertensión Arterial, e -Hipotiroidismo,** el cual, se verá delimitado, exclusivamente, a los insumos, procedimientos, citas, medicamentos y, en general, toda actividad de salud encaminada al tratamiento de

las mencionadas enfermedades, siempre y cuando, tales servicios de salud hayan sido prescritos u ordenados por los médicos tratantes adscritos a la EPS a la que se encuentra afiliado el agenciado y/o IPS 'S que preste servicios de salud a la primera de conformidad con lo anotado en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: COMPULSAR copias de la presente acción tutelar con destino a la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen los delitos en los que hayan podido incurrir en este trámite el agente interventor de la nueva EPS, Dr. Julio Alberto Rincón Ramírez, en calidad de representante legal de la entidad conforme al certificado de existencia y representación legal, el Dr. Fernando Bedoya Herrera, y la Dra. Adriana Tobar Calderón, ambos, en calidad de gerentes de la CLINICA PALMIRA.

QUINTO: CONMINAR a la EMPRESA PROMOTORA DE SALUD – NUEVA EPS S.A para que, en ningún otro caso, vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron lugar a la presentación del amparo tutelar *-no autorización y materialización de servicios de salud prescritos a sus afiliados por el galeno tratante-*, procediendo de manera pronta y sin dilaciones injustificadas, a autorizar y practicar los procedimientos que en salud requieran los usuarios, con la advertencia que, si procediere de modo contrario, será sancionada conforme a las previsiones normativas del Decreto 2591 de 1991, sin perjuicio de las responsabilidades en que ya hubieren incurrido.

SEXTO: NOTIFICAR a las partes involucradas la presente decisión en los términos descritos en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Contra la presente decisión procede impugnación que se surtirá ante el Superior.

SÉPTIMO: ORDENAR que una vez en firme el presente fallo, se remita la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La Juez,


MÓNICA ANDREA GARCÍA MICOLTA